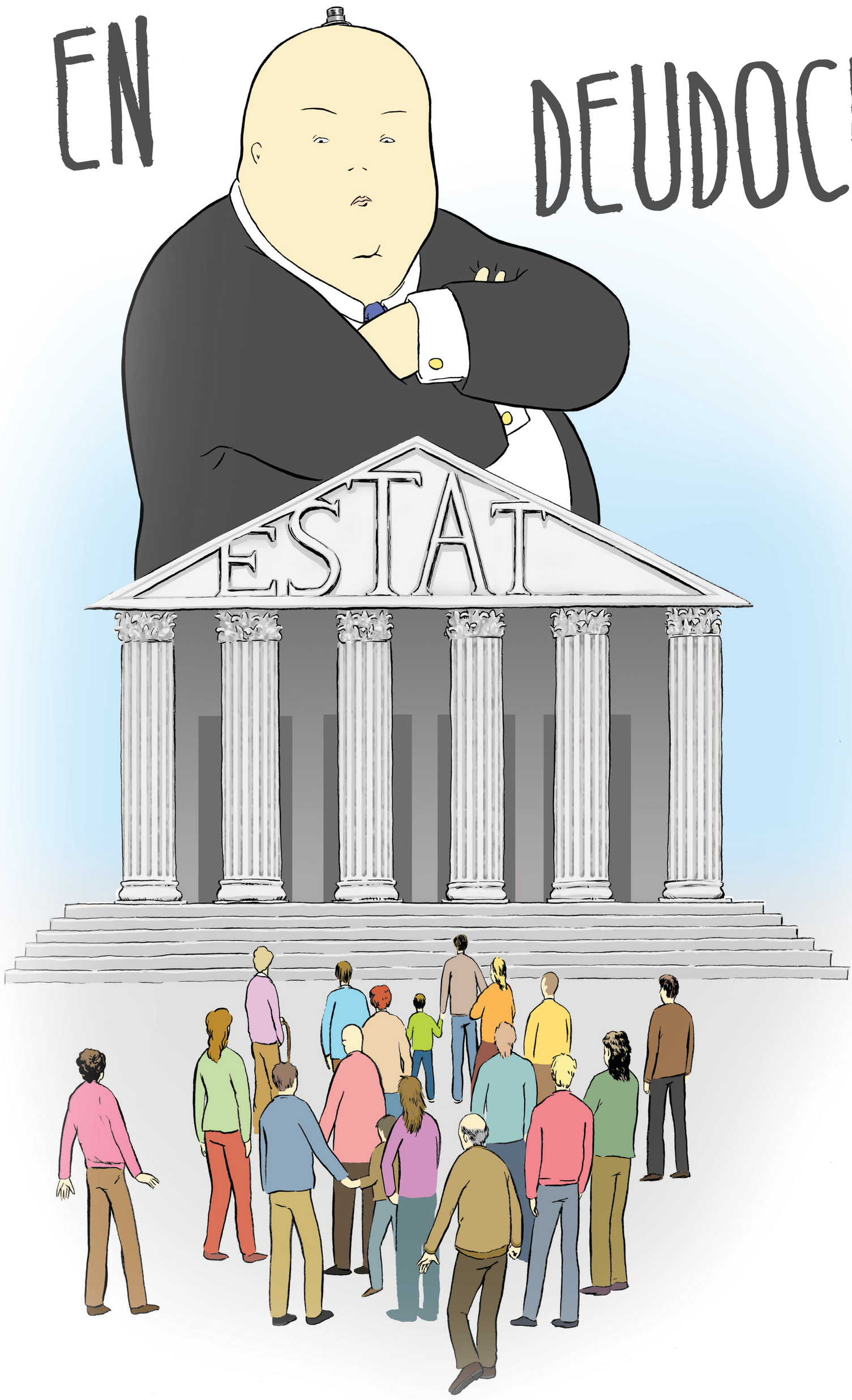
VIVIR EN DEUDOCRACIA



Esta exposición ha sido creada desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) "No Debemos! No Pagamos!", con el apoyo y la participación del Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

La PACD es un movimiento ciudadano que nació en 2011, y su objetivo es evidenciar la ilegitimidad de la deuda a través de una Auditoría Ciudadana. Consideramos como deuda ilegítima aquella que ha contraído un gobierno, pero que no ha servido para beneficiar a la población, y que, a la vez, se ha utilizado como justificación para aplicar políticas de austeridad. Por lo tanto, la PACD, en última instancia, aspira a generar la fuerza necesaria para no pagar la deuda ilegítima.

#NoDebemosNoPagamos ◆ @AuditCiudadana ◆ facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda ◆ auditciudadana@gmail.com ◆ www.auditoriaciudadana.net

DESCÁRGATE LA EXPO AQUÍ

Organizado por: PLATAFORMA AUDITORIA CIUTADANA DEL DEUTE (No devem! No paguem!) · ODG Observatori del Deute en la Globalització

Con el soporte de:

Esta exposición se ha realizado con el apoyo económico de la Unión Europea. Su contenido es unicamente responsabilidad de la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització y bajo ninguna circunstáncia se puede ver como reflejo de la posición de la Unión Europea.

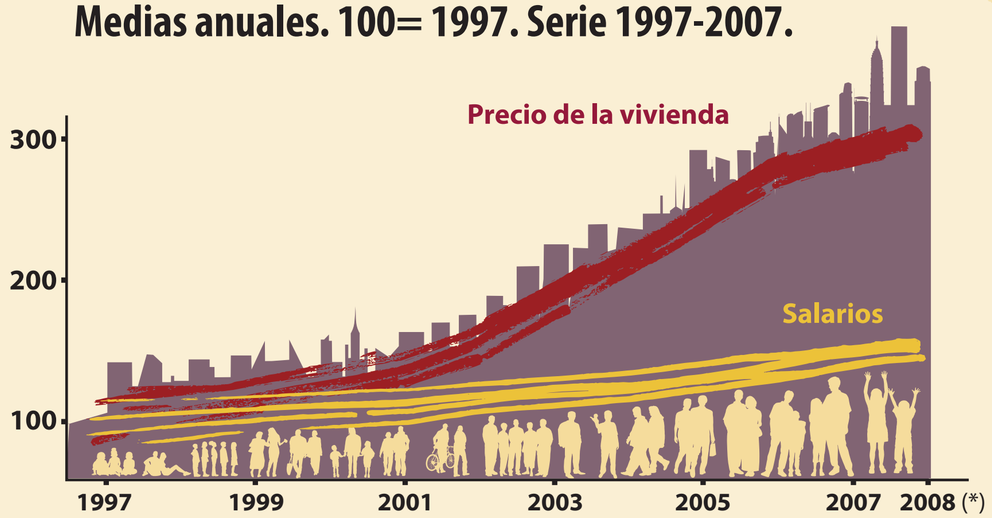


¿LA VIDA FELIZ?

HIPOTECÁNDONOS LA VIDA

Nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, apuntando al alto nivel de deuda familiar acumulada en el Estado español.

Precio de la vivienda y salarios.
Medias anuales. 100= 1997. Serie 1997-2007.

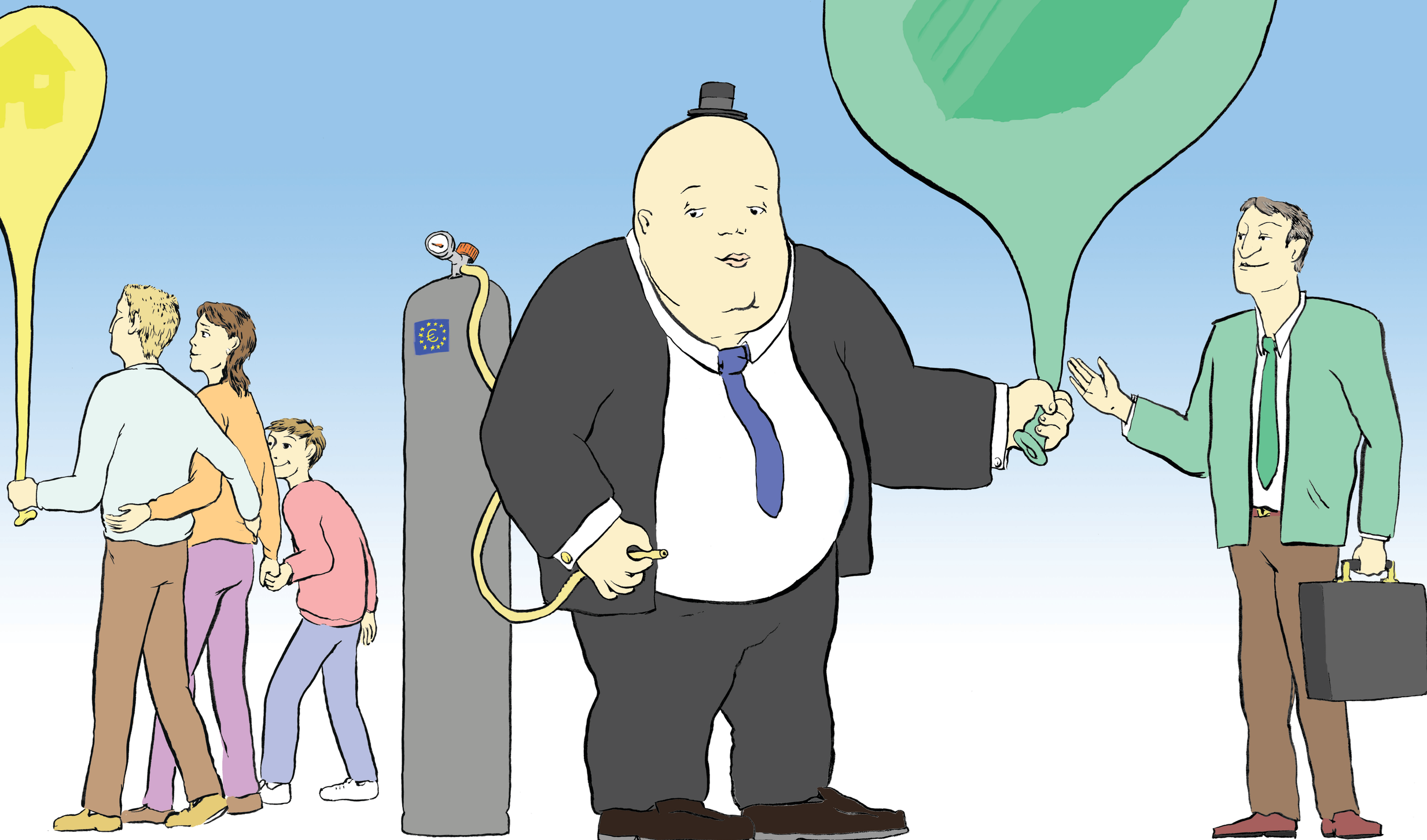


(*) Previsión. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Vivienda.

Entre 1996 y 2007, la deuda de las familias se multiplicó por más de 5, a causa principalmente de la necesidad de acceder a un derecho básico: la vivienda. Vemos como en el año 2007 la compra de viviendas representaba el 80% del crédito de las familias. En un contexto de reducciones de los salarios y con la ausencia de políticas públicas de vivienda, el recurso del crédito se convierte en el único instrumento para acceder a la vivienda para muchas familias.

A pesar de todo, en 2008 sólo el 50,1% de los hogares tenían algún tipo de deuda, y las familias con mayor nivel de renta se han endeudado mucho más que las familias empobrecidas. Además, mientras que las familias con menos renta se han endeudado fundamentalmente por adquirir la vivienda principal, las más ricas lo hacen por otras inversiones inmobiliarias.

Mientras el precio de la vivienda se triplicó entre 1997 y 2008, los salarios tan sólo aumentaron en un 50%.



¿EL NEGOCIO DE LA BURBUJA?

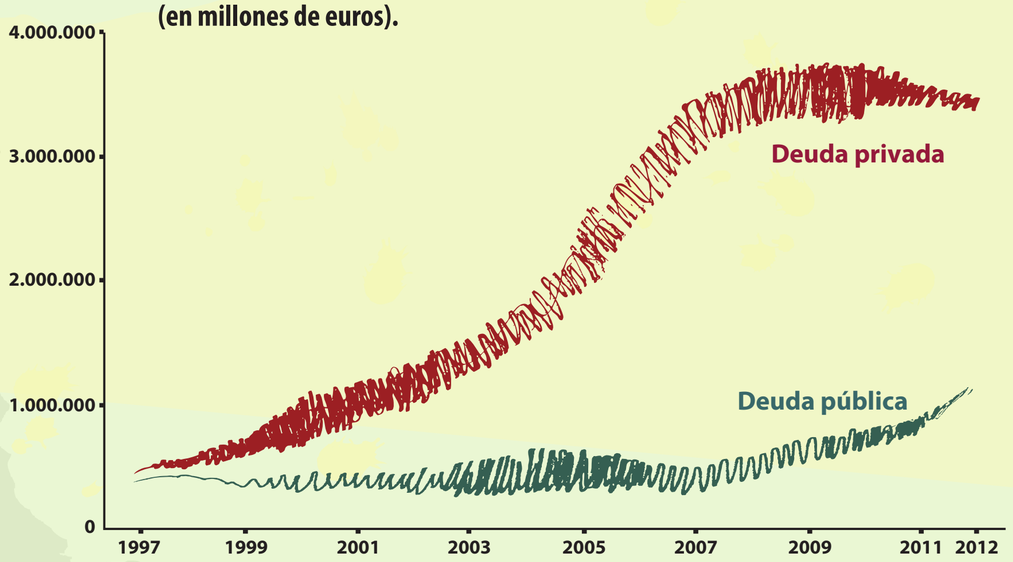
SIN CRÉDITO NO HAY BURBUJA

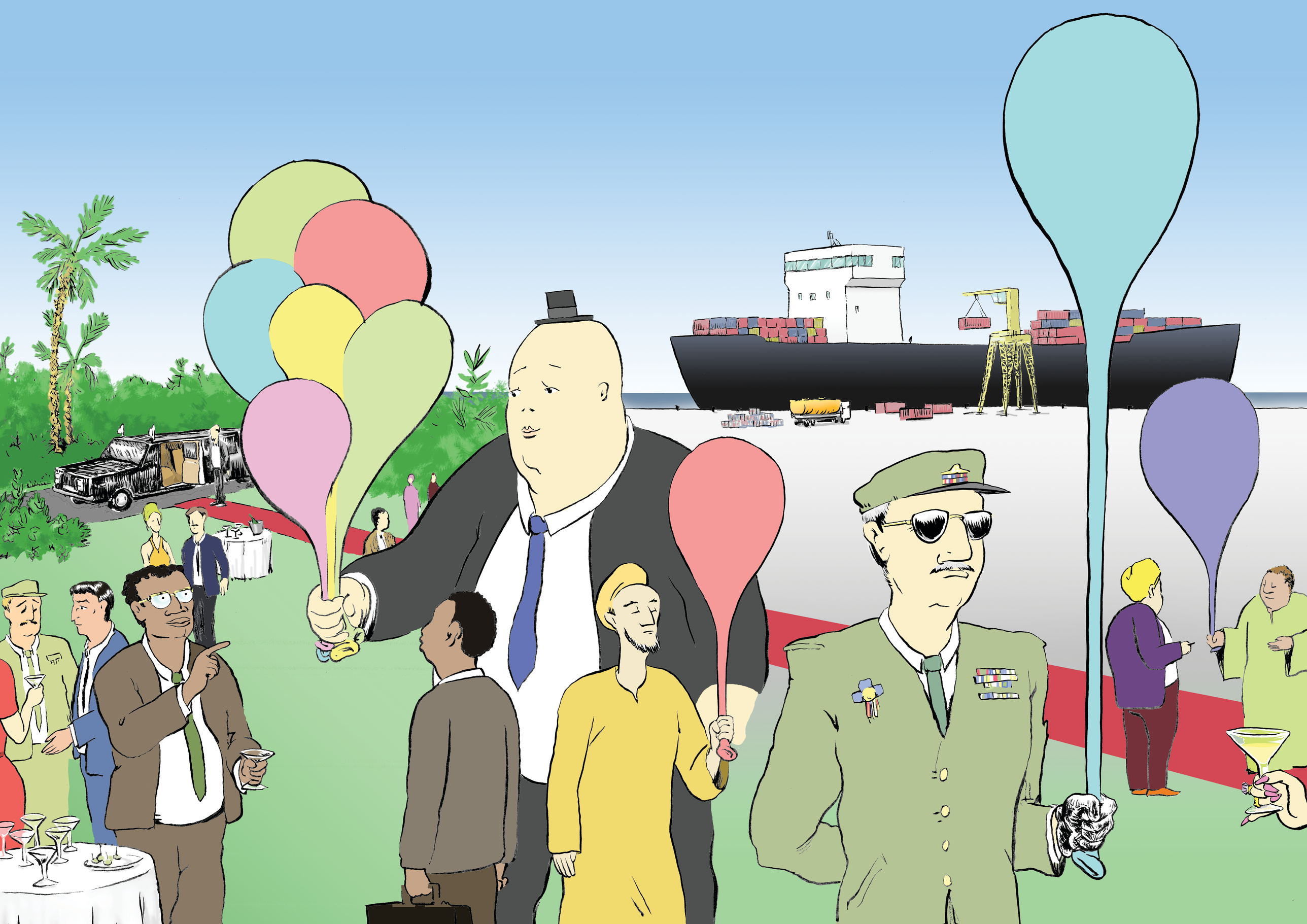
Entre 1996 y 2007 la deuda de los bancos se multiplicó por 24,5 y la de las empresas no financieras (sobre todo inmobiliarias, constructoras y transnacionales) por 6,5.

La deuda de las empresas no financieras y financieras (bancos) ha crecido por encima de la deuda de las familias y la deuda pública, suponiendo en 2008 más del 60% del total. La deuda del sector inmobiliario representó en 2007 más del 40% de la deuda de las empresas cotizadas no financieras.

Especialmente a partir de la entrada del euro, los bancos alemanes, franceses, norteamericanos y británicos prestaron dinero a bajos intereses a los bancos españoles y del resto de la periferia europea, y éstos volvieron a prestar ese dinero a las empresas constructoras e inmobiliarias. El elemento clave de este negocio bancario e inmobiliario era que las familias dispusieran de crédito fácil para poder comprar los pisos, y así las empresas constructoras, inmobiliarias y los bancos españoles podían devolver los créditos. Sin este crédito no se produce la venta, las deudas no se pueden pagar y el ciclo del negocio no se puede cerrar. Así pues, el endeudamiento familiar es un elemento clave para asegurar el beneficio de empresas y bancos durante el periodo de expansión de la burbuja inmobiliaria.

Evolución de la deuda española 1997-2012.
(en millones de euros).





¿"DESARROLLO" A CRÉDITO?

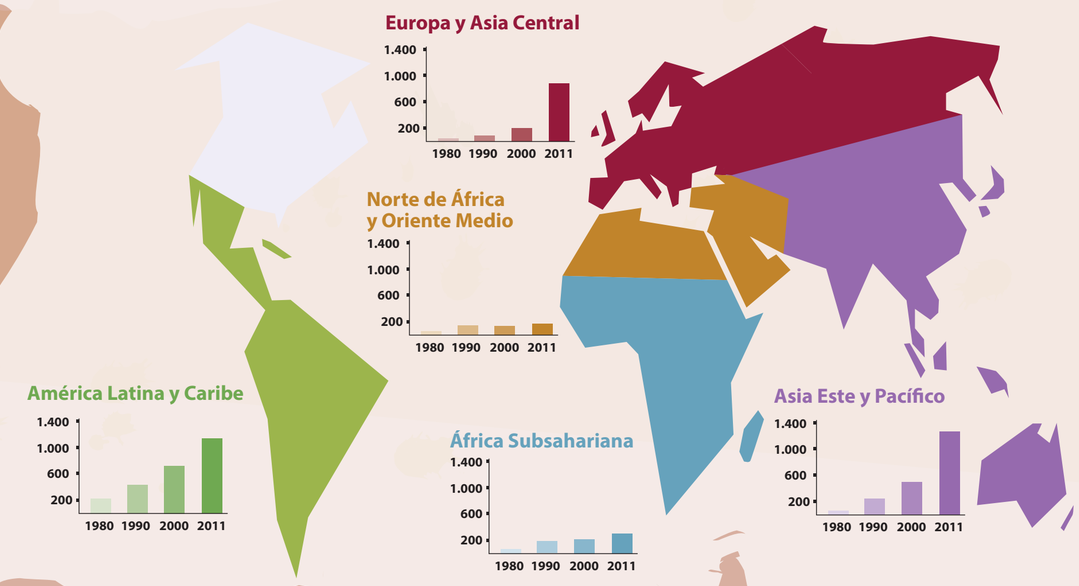
EXPORTAMOS LA DEUDA PARA BENEFICIO DE LAS GRANDES EMPRESAS

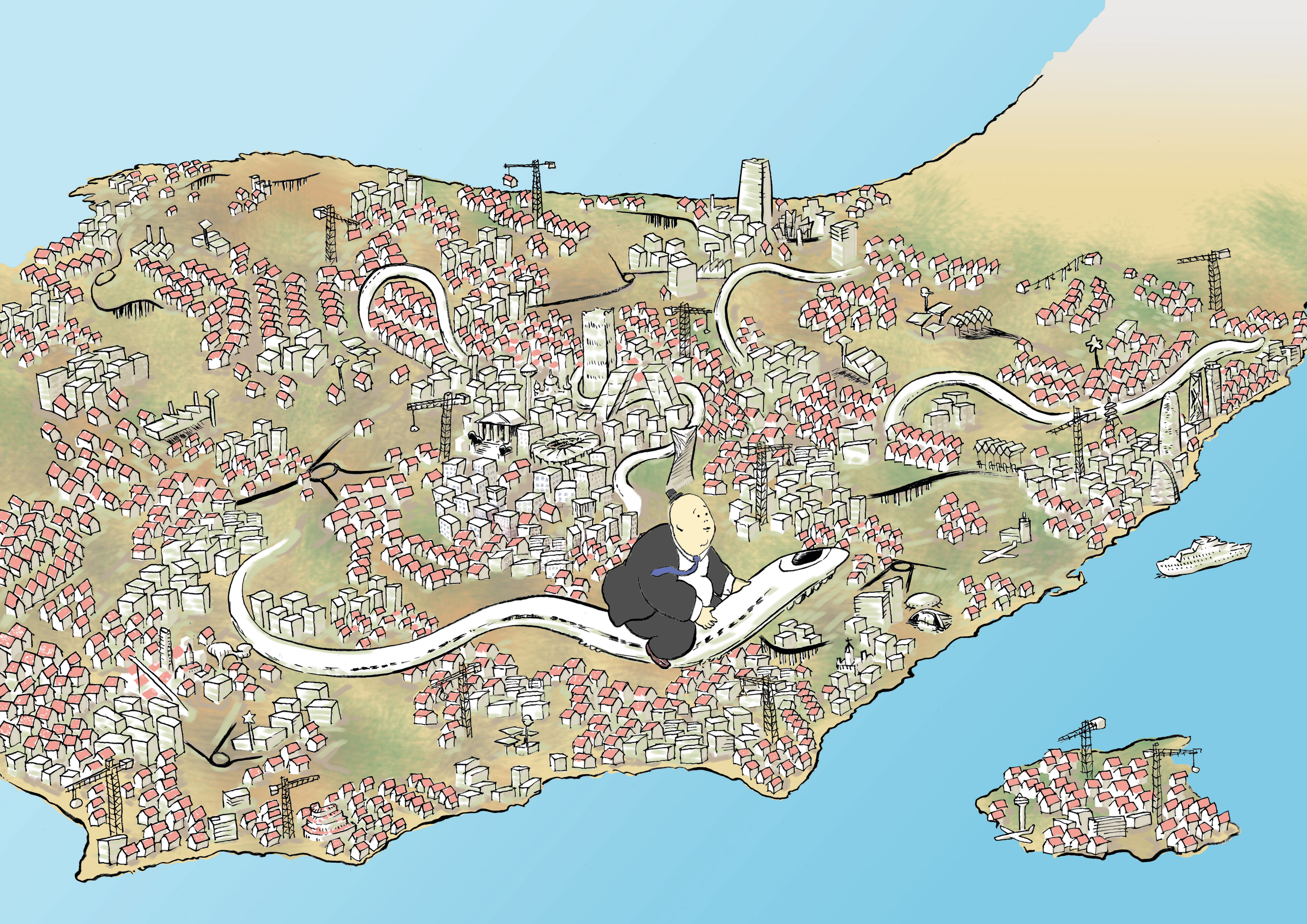
El gobierno español ha promovido la expansión de las empresas españolas en América Latina, África y Asia, bajo la bandera de la cooperación, endeudando a los países empobrecidos.

Siguiendo con la lógica colonialista, gobierno y bancos españoles, junto con instituciones financieras como el Banco Mundial y el FMI, ha promovido el endeudamiento de América Latina, África y Asia para facilitar las inversiones de empresas transnacionales españolas y los intercambios comerciales. Estos créditos han sido ofrecidos a las élites y gobiernos de los países empobrecidos a cambio de que éstos favorezcan la entrada de las empresas multinacionales. Estas inversiones no han beneficiado a la mayoría de la población, pero en cambio las poblaciones han tenido que asumir las deudas y las medidas de austeridad que las acompañan. Asimismo, deuda e inversiones extranjeras han supuesto violaciones de los derechos humanos y expolio de recursos naturales en los países empobrecidos.

Las políticas neoliberales y la austeridad impuestas por el FMI y los acreedores para afrontar la crisis de la deuda del Sur son la causa de una profunda crisis social y un creciente empobrecimiento. Además, su deuda no ha dejado de aumentar y ha pasado de 2,1 billones de dólares en 2000 a 4,9 billones en 2011.

Evolución de la deuda externa en los países empobrecidos por regiones 1980-2011. (en millares de millones de euros).





¿ESPAÑA EN LA CHAMPIONS?

ESPAÑA A LA COLA EN PRESIÓN FISCAL EN EUROPA

Durante las últimas dos décadas, mientras se ha ido reduciendo la presión fiscal a los más ricos, se han malgastado fondos públicos en inversiones millonarias que no son útiles.

El Estado español es el país con más kilómetros de líneas de alta velocidad del mundo (3.100 km). Una red cara y poco eficiente que no responde a las necesidades de la mayoría de la población. Hasta el año 2010 se habían gastado cerca de 45.000 millones de euros en el AVE, destacando los 3.829 millones invertidos en el AVE Madrid-Extremadura (el presupuesto del Ministerio de Sanidad para 2014 es de 1.907 millones de euros), a la vez que se ha dejado de invertir en las redes de cercanías. A este gasto se añade un elevado desembolso militar (inversión de 32.000 millones de euros comprometidos en Programas Especiales de Armamento), una red excesiva de aeropuertos, o megainfraestructuras como la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela (400 millones) o el Circuito de Fórmula 1 de Valencia (85 millones). Inversiones todas ellas que han enriquecido al oligopolio de la construcción.

Esta fiebre de grandes infraestructuras se ha financiado a costa de las generaciones futuras, ya que una parte importante de éstas se financia con deuda pública y, además, han supuesto fuertes impactos medioambientales.



Aeropuerto de Ciudad Real
Coste: 1.100 millones €



AVE Madrid-Extremadura
Coste: 3.829 millones €



Hospital Univ. Central de Asturias
Coste: 1.700 millones €

Palacio de Congresos de Huesca
Coste: 30 millones €





Tranvía de Jaén
Coste: 120 millones €



Ayuntamiento de Madrid
Coste: 500 millones €



Circuito de Fórmula 1 (Valencia)
Coste: 85 millones €



Ciudad de la Cultura (Galicia)
Coste: 400 millones €


CREDIT

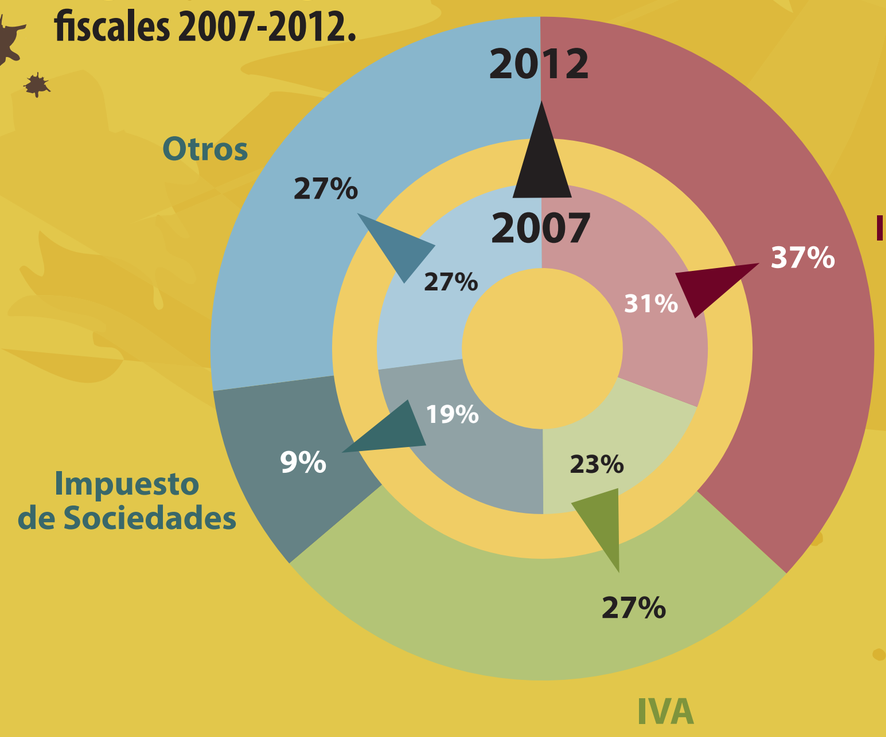
Y ESTO, ¿CÓMO LO PAGAMOS?

LA ESPIRAL DE LA DEUDA Y LOS RECORTES

La presión fiscal en el Estado español sobre las empresas y las rentas más altas ha ido reduciéndose, mientras que el fraude fiscal y la deuda pública han aumentado.

Aunque nos dicen que el problema es el exceso de gasto público, pocas veces se ha cuestionado el modelo de recaudación de impuestos. Mientras las ciudadanas aportamos el 91% de los impuestos a través del IRFP o el IVA, las empresas aportan sólo el 9%. Por ejemplo, entre 1998 y 2012 el impuesto de sociedades se ha reducido del 35% al 30%, a la vez que deducciones y compensaciones fiscales permiten que las grandes empresas acaben pagando en realidad un 10% o menos. Además, las grandes empresas son las principales responsables del fraude fiscal: les corresponde un 72% del fraude fiscal total en el Estado español. Si se eliminara el fraude fiscal de las grandes fortunas, el Estado recaudaría 44.000 millones de euros anuales.

Origen de los ingresos fiscales 2007-2012.



Un sistema tributario regresivo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria sobre la que se sostenían buena parte de los impuestos recaudados, y el incremento del paro han llevado a una importante disminución de los ingresos fiscales y han disparado la deuda pública.

LA HISTORIA SE REPITE

Después de la crisis de la deuda en América Latina, África y Asia durante las décadas de los 80 y los 90, los acreedores privados (Club de París) y públicos (Banco Mundial, FMI) impusieron planes de Ajuste Estructural (PAE).

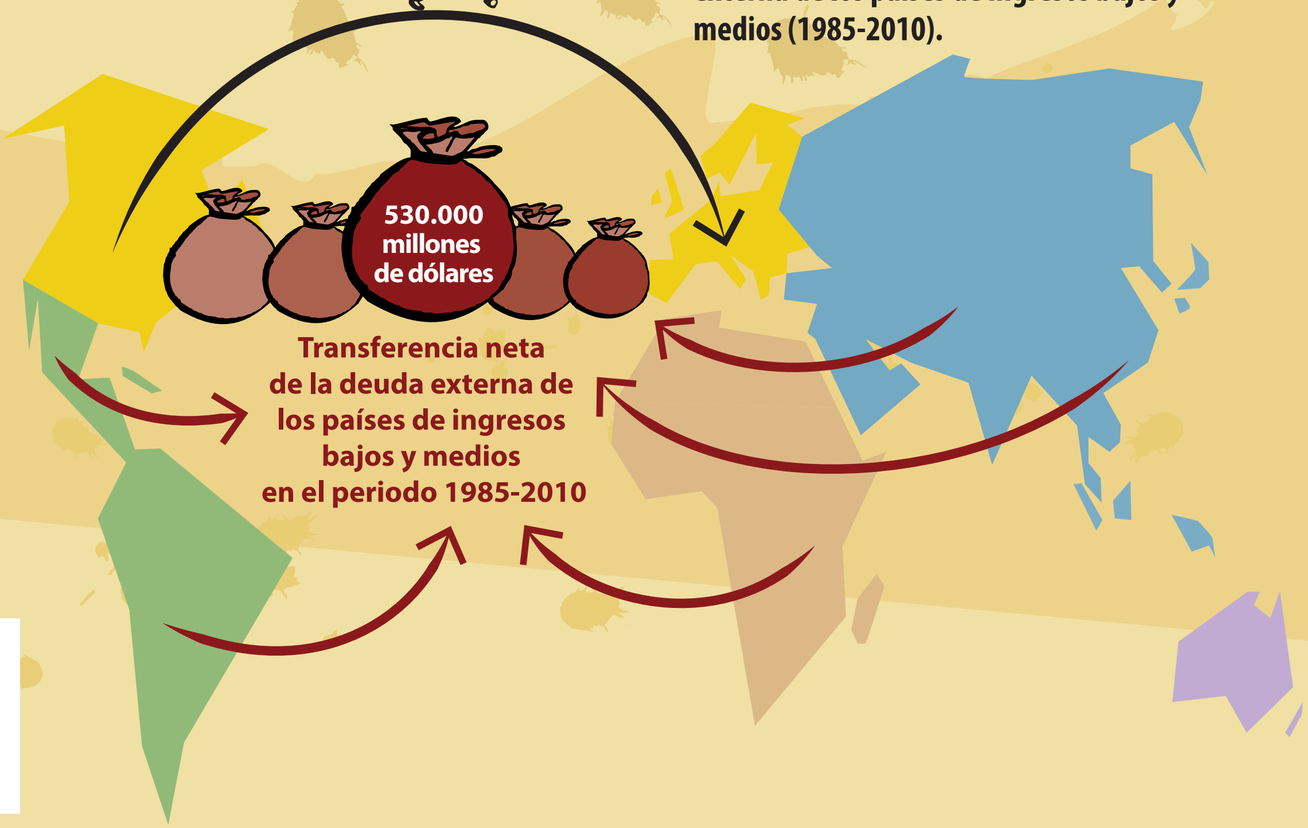
Estos planes incluían, entre otras medidas, la privatización de empresas públicas, la reducción del gasto social, el desmantelamiento del sistema de aduanas o la reducción de la protección de derechos laborales y medioambientales. El Sur entró en una "trampa de la deuda", ya que mientras la deuda pública aumentaba, también lo hacía proporción de los ingresos públicos que debían destinarse al pago de los intereses de la deuda, i así se asfixiaba la capacidad de actuación de los gobiernos. Las consecuencias de estos planes fueron devastadoras: entre 1980 y 1990 el número de pobres creció en 67 millones en América Latina y en 125 millones en África. Los planes de austeridad en Europa son el equivalente a los PAEs aplicados en los países del Sur.

La diferencia entre el dinero que ha recibido el Sur en forma de préstamos y el que éstos han pagado en forma de intereses (transferencia neta) es negativa. Esto significa que la deuda ha supuesto una transferencia de recursos desde el Sur hacia el Norte.



Plan Marshall para Europa después de la II Guerra Mundial

Comparación entre los recursos del Plan Marshall y la transferencia neta de la deuda externa de los países de ingresos bajos y medios (1985-2010).





¿HEMOS VIVIDO POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES?

El gasto social como porcentaje del PIB en el Estado español ha estado por debajo de la media de la Unión Europea en las últimas décadas.

A pesar de haber querido culpabilizar de la crisis de la deuda al elevado gasto social, repitiendo de manera insaciable que teníamos unos servicios públicos que no nos podíamos permitir, sabemos que España se hallaba en la cola respecto al dinero público destinado al gasto social. Mientras que países como Francia o Alemania destinaban más de un 30% de su PIB al gasto social, España se situaba sobre el 20%. También las finanzas del Estado estaban relativamente equilibradas, ya que el volumen de ingresos y gastos públicos eran muy similares, cosa que, en 2007, provocaba que el nivel de la deuda pública de España sobre el PIB (36%) fuese menor que el de Alemania (65%) y el de Francia (64%).



La culpabilización del exceso de gasto social ha sido el preámbulo para justificar los recortes en los sectores básicos como la educación o la sanidad, recortes que han afectado sensiblemente a la capacidad de muchas familias para vivir una vida digna.



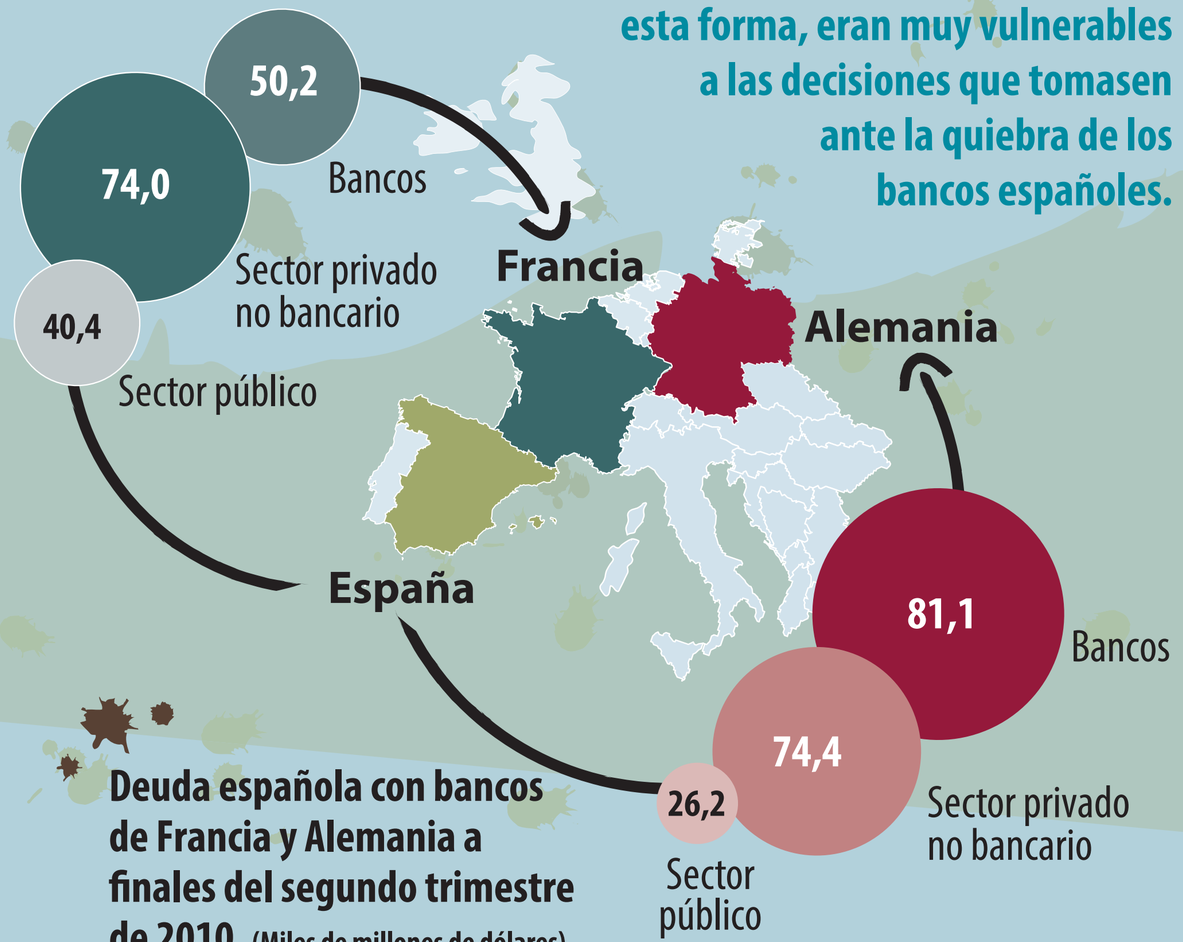
¿QUIÉN MUEVE LOS HILOS?

EL PODER ECONÓMICO EN LA SOMBRA DE LA POLÍTICA

Después del estallido de la crisis financiera global, la burbuja inmobiliaria española reventó. La paralización del mercado inmobiliario puso en riesgo las inversiones.

A partir de la crisis financiera, los bancos europeos que habían prestado a la banca española estaban en riesgo de asumir grandes pérdidas si los bancos españoles no eran rescatados. Los principales acreedores de la deuda española son, por este orden, los bancos alemanes y franceses, los norteamericanos, los de otros países de la zona euro y los del Reino Unido. Por ejemplo, en 2010 la banca española tenía una deuda con la banca alemana de 81.000 millones de dólares y de 50.000 millones con la banca francesa. La conexión entre la clase política europea y las élites financieras explica por qué los principales líderes europeos han presionado, y los políticos españoles han accedido, a rescatar las pérdidas de la banca española con dinero público, lo que permitirá que se devuelva la deuda con la banca europea.

La banca internacional, especialmente la banca alemana y la banca francesa, habían prestado grandes cantidades a los bancos españoles. De esta forma, eran muy vulnerables a las decisiones que tomasen ante la quiebra de los bancos españoles.



Deuda española con bancos de Francia y Alemania a finales del segundo trimestre de 2010. **(Miles de millones de dólares).**

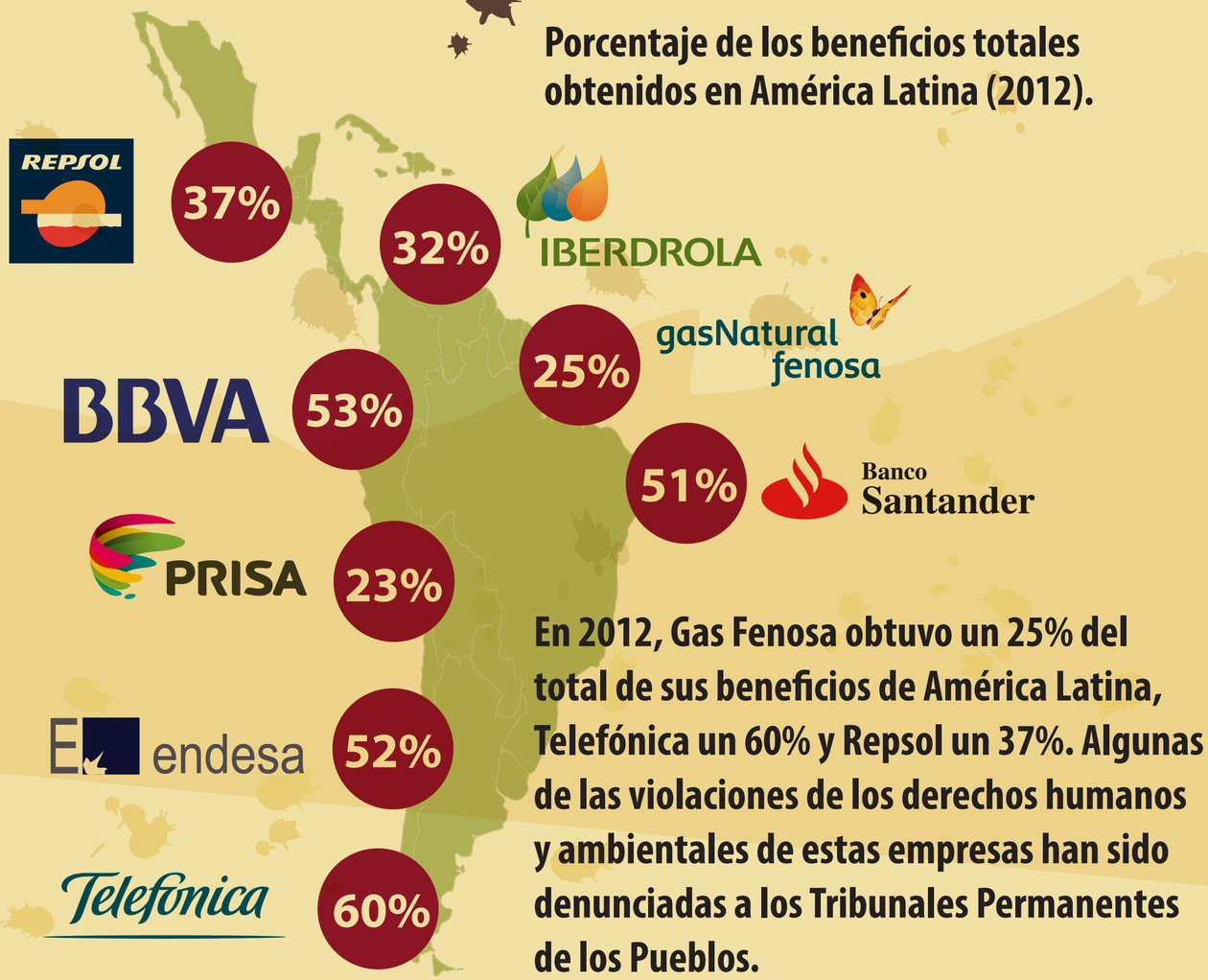

BBVA

EL FMI AL SERVICIO DEL PODER ECONÓMICO

Después de la crisis de la deuda en América Latina, las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial) presionaron a los gobiernos para que privatizaran las empresas públicas.

A cambio de refinanciar la deuda pública de los gobiernos latinoamericanos, se les obligó a privatizar sectores clave como las telecomunicaciones, la banca y la energía. En este contexto, las empresas españolas como Telefónica, Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola, Repsol YPF, Gas Natural, Banco Santander o BBVA entraron en el mercado latinoamericano beneficiándose de las condiciones favorables en las que compraron estas empresas, de los menores costes de la mano de obra, de las regulaciones ambientales menos estrictas o de los acuerdos con los gobiernos para pagar menos impuestos. Las consecuencias de las privatizaciones para el pueblo latinoamericano son, entre otras, unos precios muy altos por los servicios básicos, despido de trabajadores, sobreexplotación de los recursos naturales, además de las violaciones directas de los derechos humanos y de la naturaleza.

Porcentaje de los beneficios totales obtenidos en América Latina (2012).



En 2012, Gas Fenosa obtuvo un 25% del total de sus beneficios de América Latina, Telefónica un 60% y Repsol un 37%. Algunas de las violaciones de los derechos humanos y ambientales de estas empresas han sido denunciadas a los Tribunales Permanentes de los Pueblos.

Fuente: RETS

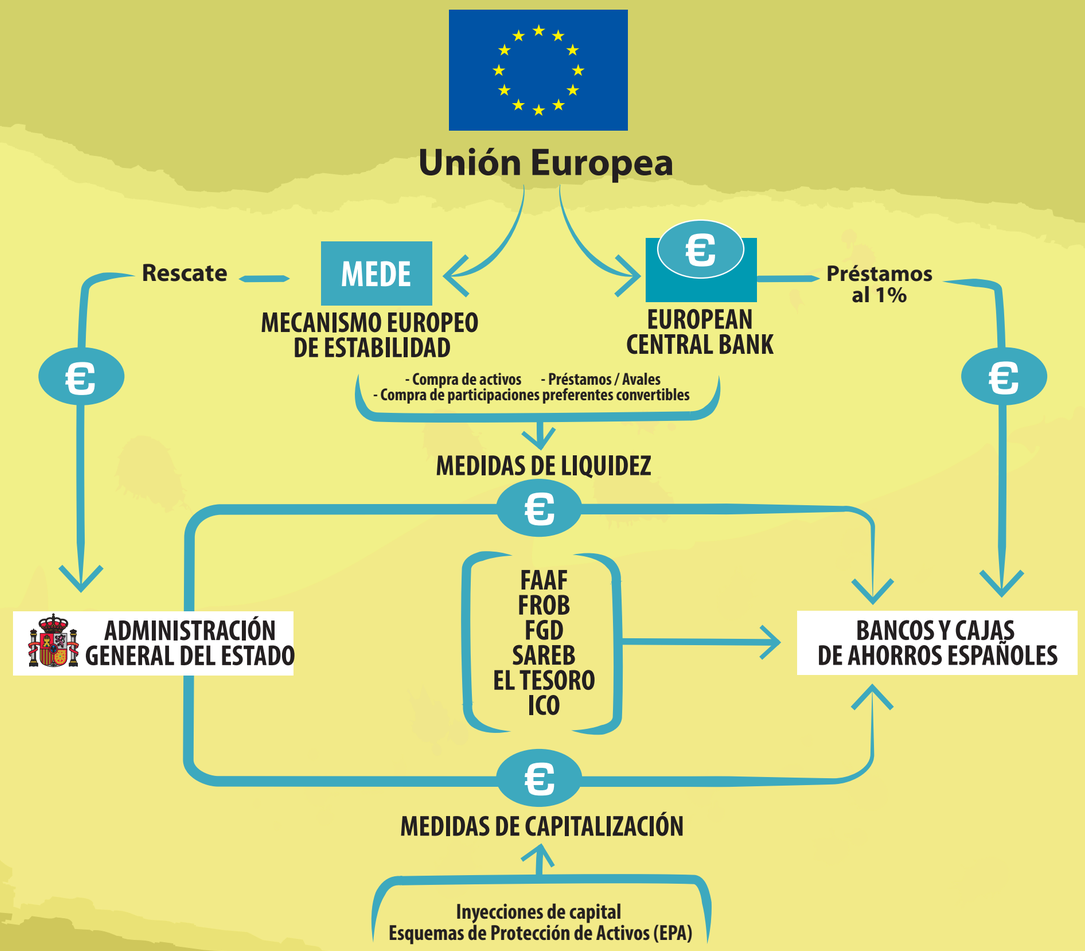


¿ES MÁS TRISTE PEDIR QUE ROBAR?

EL MULTIMILLONARIO RESCATE A LA BANCA

Ante la quiebra del sistema financiero, el Gobierno español, sin previa consulta a la ciudadanía, decide que rescatará a la banca.

Insistiendo en que era imprescindible que se rescatara a la banca, ya que temían las consecuencias de una quiebra generalizada, los diferentes gobiernos han justificado lo que es un regalo de 1,4 billones de euros (1,4 veces lo que se produce en el Estado español en 1 año). A través de mecanismos más o menos complejos, como el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), se han permitido dos cosas: en primer lugar, que los bancos pudiesen hacer frente a la deuda que tenían entre ellos, pero especialmente con los bancos europeos, y, en segundo lugar, mantener los precios de la vivienda para que así su situación no empeorase.



A pesar de que los bancos han sido rescatados con dinero público, las negociaciones no incluían que éstos volviesen a prestar a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales han tenido que cerrar, ni tampoco incluían la prohibición de desahuciar a las familias con problemas económicos, ni la obligación de alquilar en régimen de vivienda social los pisos vacíos.



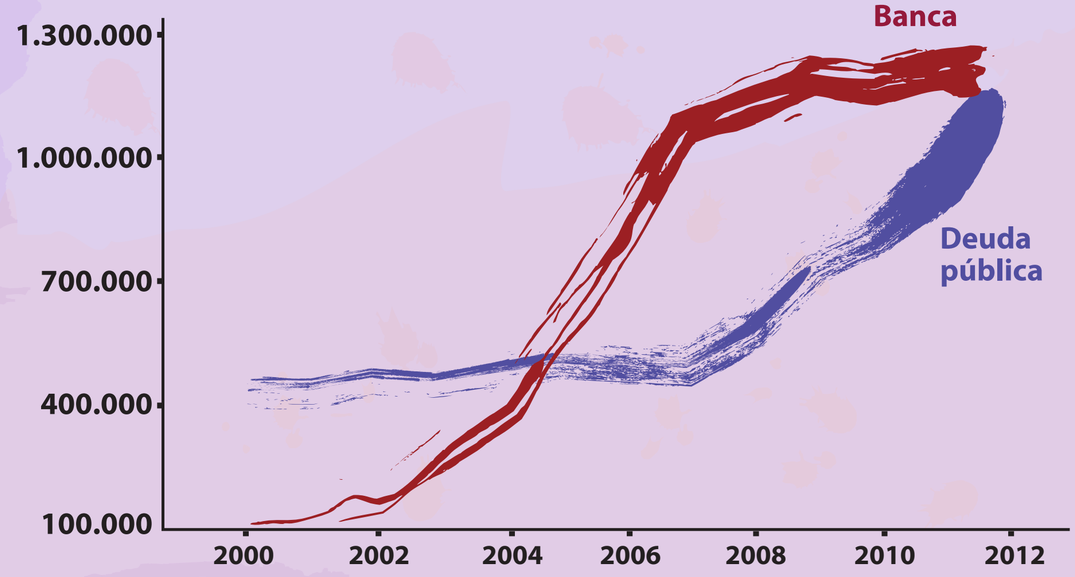
NO ES NUESTRA DEUDA

LA TRANSFORMACIÓN DE DEUDA PRIVADA EN DEUDA PÚBLICA

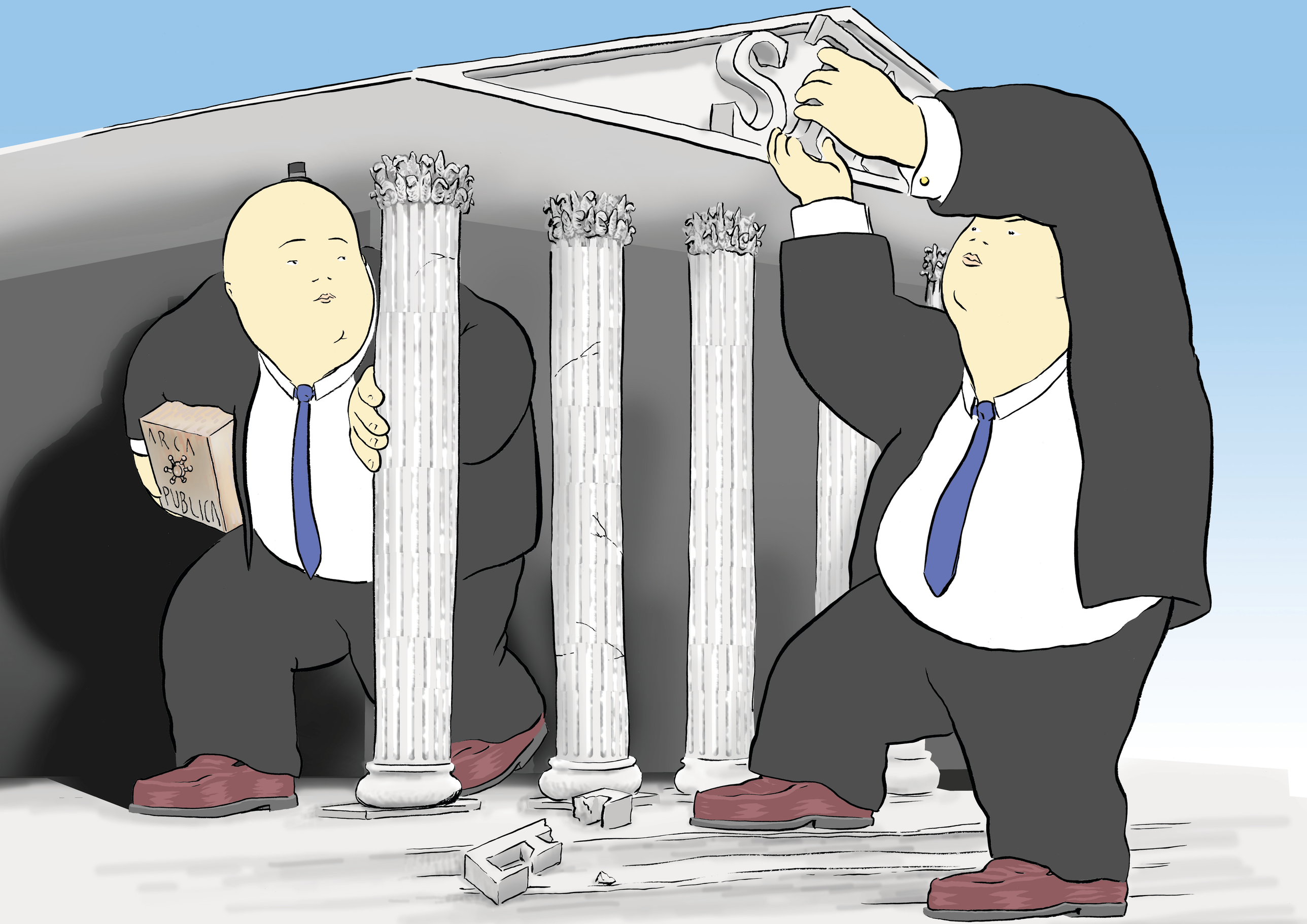
Las consecuencias del rescate bancario sobre las finanzas públicas han sido devastadoras, además de haber supuesto hipotecar el futuro político y social del país.

Aunque los medios de comunicación han intentado transmitir la idea de que el alto nivel de deuda pública ha provocado la crisis, justificando así la necesidad de reducir el gasto social, la realidad es que el aumento de la deuda pública ha sido una consecuencia, y no la causa, de la crisis. Una parte de las ayudas a la banca ya ha sido desembolsada, y se calcula que a día de hoy ha aumentado en 64.262.000 millones de euros la deuda pública del Estado. Pero también hay una parte de ayudas indirectas, a través de las cuales el Estado ha avalado a los bancos cuando éstos se han endeudado y, por lo tanto, en caso de que los bancos no puedan devolver sus deudas, será el Estado el que deba hacerlo. Se calcula que este tipo de ayudas asciende a 1.295.547 millones de euros (un 129% del PIB), que podrían transformarse en deuda pública.

Evolución de la deuda pública frente a la deuda de los bancos (2000-2012). (Millones de euros)



La opacidad con la que se han gestionado las medidas del rescate bancario ha impedido que gran parte de la población sea consciente de la verdadera magnitud de recursos públicos que se han destinado a salvar a la banca.

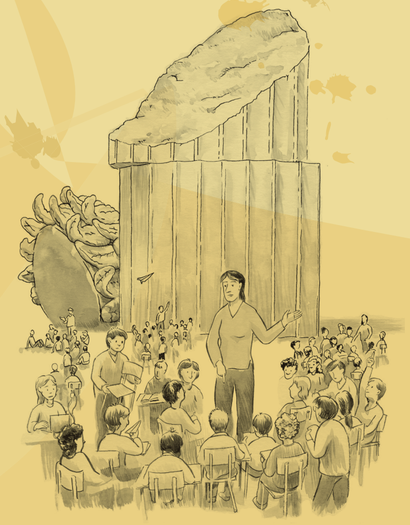

ARCA
PUBLICA

LOS IMPACTOS DE VIVIR EN DEUDOCRACIA

CÓMO NOS AFECTA LA CRISIS DE LA DEUDA EN NUESTRO DÍA A DÍA

El pago de la deuda absorbe cada vez más cantidad de recursos públicos, lo que está llevando a recortes en los servicios sociales más fundamentales. El pago de la deuda, incluyendo intereses y vencimientos, ha representado este 2013 alrededor del 19% del PIB español.

Para compensar el aumento del gasto para pagar los intereses y devolver la deuda, manteniendo los niveles de déficit público que reclama Europa, el Gobierno español ha ejecutado una serie de recortes en el gasto social. Los recortes han ido acompañados de una profundización del modelo neoliberal, es decir, privatizaciones y mercantilización de los derechos sociales.



De 2010 a 2014 los recortes en educación acumulan 7.298 millones de euros, lo que supone una caída del 16,7% de la inversión en educación en 4 años.



Además, la reforma de las pensiones supondrá también un recorte de 33.000 millones de euros de 2014 a 2023 (de los cuales 810 millones en 2014), además de limitar la revalorización de lo que cobran los pensionistas al 0,25%, incluso por debajo de un más que posible aumento del coste de la vida.



Para 2014 el Gobierno español prevé un recorte del 35,6% en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que se han de sumar los recortes y privatizaciones de la sanidad realizados desde los diferentes gobiernos autonómicos.



LA DEUDA POR ENCIMA DE TODO

¿CÓMO GARANTIZAN EL PAGO DE LA DEUDA A COSTA DE NUESTROS DERECHOS SOCIALES Y CIVILES?

En agosto de 2011 el PP y el PSOE pactaron una reforma exprés de la Constitución española, que a menudo se presenta como inamovible, que garantiza el pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto o inversión social. El Estado administra toda su fuerza represora para cumplir este nuevo orden: la deudocracia.



Mientras el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, el nuevo artículo 135 de la misma obliga al pago de la deuda, y por lo tanto al cumplimiento de las condiciones pactadas con la Troika (entre ellas el rescate bancario), por delante de cualquier otra partida. Así, entre el derecho a la vivienda y el bienestar de miles de ciudadanos, y la banca protegida por la Troika, el Gobierno prioriza a estos últimos. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC, de 2008 a 2012 se ha realizado 244.278 desalojos (y 415.117 procedimientos de ejecución hipotecaria).



Por otro lado, la reforma laboral, pactada también con la Troika, se ha revelado, como muchas denunciábamos, totalmente inútil a la hora de luchar contra el paro, condenando a los cerca de 6 millones de desempleados que hay en el Estado español, y deja a los trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad y mayor precariedad.



Ante el incremento de las protestas por el aumento de la precariedad, el paro, los desahucios, el empobrecimiento y la privatización de los derechos básicos, el Gobierno responde con un incremento de la represión y la limitación de los derechos civiles. La llamada Ley de (in)seguridad ciudadana penaliza la desobediencia civil, así como formas de protesta habituales en los últimos años. La utilización de balas de goma y la brutalidad policial a la hora de reprimir protestas o ejecutar desahucios son dos ejemplos de este incremento de la represión. Mientras defienden la Constitución a ultranza a la hora de pagar la deuda, no dudan en violar los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, e incluso los derechos civiles que esta Constitución reconoce, si es necesario con represión y brutalidad policial.



ALTERNATIVA

Más allá de luchar contra la dictadura de la deuda y sus impactos en forma de violación de derechos económicos, sociales y culturales, hace falta que trabajemos para la construcción de las alternativas a la deudocracia.

La situación de injusticia, de falta de democracia, de desigualdad creciente y de destrucción del medioambiente que genera el sistema capitalista, no deja otra opción que intentar buscar una alternativa que apunte a una verdadera transformación social. Hemos de caminar hacia un nuevo modelo social, político y económico basado en la sostenibilidad medioambiental y en el control y la justicia social de la ciudadanía para la ciudadanía.

Esta nueva sociedad hacia la que queremos avanzar será dinámica, participativa, propensa a la mejora colectiva y dirigida a un bien común, y ha de surgir de procesos de construcción descentralizados pero coordinados entre diferentes movimientos sociales y clases populares, en términos de igualdad. El entramado e intercambio de ideas entre proyectos alternativos será el que permita ir construyendo el camino hacia una sociedad más justa y sostenible.




RACIA

AUDITORÍA CIUDADANA

En el camino hacia la búsqueda de una transformación social, la Plataforma Auditoría Ciutadana de la Deuda -PACD- No Debemos! No Pagamos!, como parte integrante en esta lucha colectiva, plantea un cambio de paradigmas, que pasan por exigir el NO pago de la deuda ilegítima.

Desde la PACD queremos contribuir a la promoción de un cambio del modelo económico y social. Entendemos que el modelo económico no se puede basar en el endeudamiento, por ser éste un generador de profundas injusticias. Reclamamos la soberanía de los pueblos a través de espacios de aprendizaje y metodología de democracia participativa, basados en el derecho incondicional a la formación, y ofreciendo (o facilitando) herramientas de empoderamiento con las que luchar por la transparencia, la democracia, la sostenibilidad y la justicia social.

En un mundo en el que la deuda es uno de los instrumentos para someter a los pueblos a la dictadura del capital, la PACD plantea la necesidad de procesos de construcción colectivos que pongan en evidencia su ilegitimidad y las injusticias que generan al priorizar su pago. Entre estos procesos, planteamos la promoción de auditorías ciudadanas que, además de facilitar el derecho a saber los detalles de cómo hemos llegado a esta situación, enriquezcan el debate sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Las auditorías ciudadanas se plantean como procesos abiertos, colectivos, permanentes, descentralizados y empoderadores que han de servir, además, para dirimir responsabilidades y decidir, entre todas, qué parte de la deuda consideramos ilegítima y nos negamos a pagar.

Una medida que, por las propias experiencias de países del Sur, se nos presenta como la única vía activa real que permita la opción de poder romper con el sistema actual.